

SALTA - Mercado Amelia E y ots. c. Municipalidad de la ciudad de Salta (2018). Inundaciones. Obras de remediación. Rol del Poder Judicial. Procesos colectivos. Justiciabilidad. Cuestiones procesales.

La Corte provincial considera el recurso en el marco de un amparo que versa sobre la ejecución de obras públicas de estabilización y saneamiento de la cuenca del río Arenales.

En la apelación la Provincia sostiene que el “a quo” debía limitarse a hacer un seguimiento y control de las tareas desarrolladas por las demandadas.

Al rechazar el planteo, la Corte provincial recuerda su decisión anterior en la que había establecido la continuidad del proceso bajo las reglas del denominado litigio de derecho público o litigio estructural, en el cual el juez “a quo”, además de las medidas regulatorias específicas que ordenase, debía declarar el derecho y dictar sentencia.

- Constituye un deber ineludible para la provincia y el municipio, defender y resguardar el medio ambiente en procura de mejorar la calidad de vida de los habitantes, así como prevenir la contaminación ambiental y sancionar las conductas contrarias (arts. 30 y 176, incs. 1º, 9º y 15 de la Constitución Provincial); y en relación a ello, cabe considerar -como se adelantó- que las tareas de saneamiento, tanto para reparar el daño ambiental como para evitar la reiteración de futuras inundaciones, se hallan inconclusas, y por ello deben ser llevadas a cabo en atención al objeto del presente amparo y a las consideraciones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias desarrolladas en el fallo de esta Corte de fs. 347/368.
- Tampoco se verifica la vulneración del principio de división de poderes que la Provincia atribuye al fallo apelado. En efecto, lo resuelto por el “a quo” se encuentra orientado a los resultados de saneamiento y prevención de futuras inundaciones y contaminaciones, pero no determina los procedimientos a desarrollar, los que serán definidos por los organismos involucrados, pues el planeamiento y ejecución compete a las autoridades de aplicación; razón por la cual el fallo recurrido no ha invadido facultades de otros poderes. Ello es así, sin perjuicio del control y seguimiento jurisdiccional que pudiera corresponder.

TEXTO SENTENCIA

(Tomo 222: 817/836)

Salta, 26 de octubre de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados “**MERCADO, AMELIA EMILIA Y OTROS VS. MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA; PROVINCIA DE SALTA; MAROZZI S.R.L. - AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN**” (Expte. N°CJS 37.896/15), y

CONSIDERANDO:

Los Dres. **Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar**, la Dra. **Sandra Bonari**, el Dr. **Guillermo Alberto Catalano**, la Dra. **Teresa Ovejero Cornejo** y el Dr. **Guillermo Alberto Posadas**, dijeron:

1º) Que en contra de la sentencia de fs. 898/915, interpusieron recursos de apelación los actores (fs. 917/920) y las codemandadas Néstor A. Marozzi S.A. y Provincia de Salta (fs. 923/925 y fs. 926, respectivamente).

El fallo impugnado hizo lugar a la acción de amparo deducida, ordenando a las codemandadas Provincia de Salta, Municipalidad de la Ciudad de Salta y CoSAySa, que confeccionen, presenten y ejecuten un Plan de Manejo del Río Arenales, un Plan Sanitario de Emergencia y un Plan de Monitoreo, en los plazos, con los objetivos y las pautas enunciadas en el considerando VIII de la sentencia y condenó a la empresa Néstor A. Marozzi S.A. a retirar los metros de avance del relleno de su propiedad necesarios para que los límites del inmueble catastro N°88.825 del departamento Capital coincidan con los estribos del puente existente sobre Avenida Tavella y, de corresponder, también retirar oportunamente la franja de terreno que eventualmente surja luego de fijada la línea de ribera, todo ello en un plazo no mayor de 60 días corridos. Al decidir sobre las costas, el juez “a quo” las impuso por el orden causado.

2º) Que el recurso de los actores tiene por objeto impugnar el modo en que fueron impuestas las costas. Afirman que establecerlas por el orden causado resulta arbitrario, discriminatorio e injusto; y que se aparta de lo dispuesto anteriormente por esta Corte en la causa, y de la regla general prevista en el art. 67 del C.P.C.C. Expresan que no es justo que los gastos sean soportados por quienes tuvieron la ineludible necesidad de acudir ante la justicia para hacer valer sus derechos, y sostienen que no se verifica apresuramiento, negligencia, abuso de derecho, temeridad o malicia alguna en sus planteos y que, de tal manera, se afectaría el derecho de los vulnerables de acceder a la justicia.

Aseveran que los fundamentos de la sentencia resultan falaces e incongruentes, pues no definen cuáles son las singularidades del caso y los distintos pronunciamientos a los que se refiere y qué gravitación han tenido con respecto a las costas. Cuestionan que la decisión se funde en la supuesta necesidad de asegurar la participación ciudadana en amparos colectivos, pues en estos autos las partes fueron siempre las mismas. Arguyen que la resolución recurrida tampoco especifica quiénes son los vecinos que supuestamente realizaron obras clandestinas, de qué obras se tratan ni de qué manera ellas tendrían efectos contaminantes.

A fs. 923/925 expresa sus agravios la codemandada Néstor A. Marozzi S.A. y sostiene que la condena a retirar metros de tierra acumulada fuera de los límites del catastro N°88.825 resulta arbitraria, por haber probado -según arguye- que esa empresa no ha efectuado ningún movimiento de suelo fuera de tales límites. Añade que también

ha acreditado que denunció ante la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia que la acumulación de tierra no fue realizada por su parte sino por la Municipalidad de la Ciudad de Salta, y que ello motivó que aquel organismo intimase a ésta a retirar el relleno acumulado. Agrega que, de persistir algún relleno que deba ser removido, no corresponde a esa empresa su realización.

Se agravia de que se la condene a retirar la franja de terreno que eventualmente surja de la fijación de la línea de ribera, pues -sostiene- ello implica una condena futura, hipotética y eventual. Afirma que la responsabilidad de que no exista línea de ribera en esa porción del cauce del río Arenales es exclusiva de las autoridades municipales y provinciales.

Expresa también que, si al fijarse tal línea se llegara a afectar su propiedad privada, el Estado deberá proceder a la expropiación y, en su caso, a los trabajos necesarios que faciliten el escurrimiento de las aguas.

A fs. 936/938 expresa agravios el representante de la Provincia de Salta y postula que el fallo impugnado configura un apartamiento de lo resuelto por esta Corte a fs. 347/368, y que, de conformidad a ese pronunciamiento, el “a quo” debía limitarse a efectuar el seguimiento y control de las tareas desarrolladas por las demandadas, lo que -según entiende- ya fue cumplido.

Afirma que evaluar si las obras realizadas y en curso de ejecución resultan idóneas para alcanzar el objeto del proceso, es una cuestión de competencia privativa de la Administración y, por ello, ajena al Poder Judicial, y que lo dispuesto por el “a quo” importa una afectación al principio de división de poderes.

A fs. 946/947, 961/965 y 1010/1011, los actores, la Provincia de Salta y CoSAySa contestan las expresiones de agravios formuladas en autos y piden su rechazo, en mérito a las razones que, respectivamente, desarrollan.

A fs. 1029/1031 vta. emite su dictamen el señor Fiscal ante la Corte Nº1, y se encuentra firme y consentido el llamado de autos de fs. 1032.

3º) Que el recurso de los actores está referido únicamente a la imposición de costas, en tanto que las apelaciones de las demandadas cuestionan el sentido de la sentencia. Siendo ello así, por una razón de orden metodológico se tratarán éstas en primer lugar.

4º) Que a tenor de lo dispuesto por el art. 87 de la Constitución Provincial, la acción de amparo procede ante actos u omisiones ilegales de la autoridad o de los particulares, restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícita e implícitamente allí consagrados. La viabilidad de este remedio requiere, en consecuencia, la invocación de un derecho indiscutible, cierto, preciso, de jerarquía constitucional, pero además, que la conducta impugnada sea manifiestamente arbitraria o ilegítima, y que el daño no pueda evitarse o repararse adecuadamente por medio de otras vías (cfr. esta Corte, Tomo 69:917; 127:315, entre otros).

Así el amparo constituye un proceso excepcional que exige, para su apertura, circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina un daño grave, sólo eventualmente reparable por este procedimiento urgente y expeditivo. Debe tratarse de la vulneración de garantías constitucionales, pues la razón

de ser de la acción de amparo es la de proveer el remedio adecuado contra la arbitraria violación de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución (cfr. CSJN, Fallos, 305:2237; 306:788; esta Corte, Tomo 178:1041, entre muchos otros).

El objeto de la presente acción de amparo, según surge de la audiencia de fecha 27/09/12 (fs. 252 y vta.) ha quedado determinado en la estabilización y saneamiento de la cuenca del Río Arenales. Ahora bien, teniendo en consideración la normativa de los arts. 41 de la Constitución Nacional y 30, 83 y 87 de la Constitución Provincial y la valoración que efectúa el “a quo” de la prueba producida en autos, cabe adelantar que no se ha cumplido aún tal finalidad.

Ello es así pues las características de la cuenca -que arrastra sedimentos con las crecientes-, la constante acción antrópica sobre ella, y la carencia de efectividad de las actividades llevadas a cabo por los organismos públicos sobre el río y sobre las descargas que recibe, hacen necesario una permanente intervención correctiva y preventiva de las autoridades competentes para rectificar los desvíos del cauce, controlando y contrarrestando los vuelcos de desechos contaminantes al río.

5º) Que la expresión de agravios presentada por la codemandada Néstor A. Marozzi S.A. resulta insuficiente para la procedencia del recurso, pues esta ha omitido efectuar una crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo, limitándose a proponer una solución distinta.

En efecto, la apelante entiende que su parte no está obligada a retirar el relleno y los escombros que se hallan en el límite de su propiedad y afirma que el fallo impugnado implica una condena futura, hipotética y eventual, sin llegar a exponer razones suficientes para desvirtuar las consideraciones efectuadas por el “a quo” sobre la necesidad de que retraiga su avance sobre el cauce del río Arenales; tampoco logra refutar que se ha verificado la existencia de rellenos y la colocación de un alambrado por su parte, los que exceden los límites de su propiedad.

La recurrente no desvirtúa el fundamento del “a quo” que consideró que la causa penal agregada como prueba en autos no tiene incidencia sobre la decisión adoptada, en razón de que la localización de la terraza antrópica del catastro Nº88.825, al modificar el curso del río, apareja un riesgo permanente de nuevas inundaciones para los vecinos ribereños; tampoco rebate los fundamentos del fallo que tiene por acreditado que la empresa ocupó y cercó parte del talud, lo que constituye un impedimento para que la Municipalidad finalice sus trabajos de remoción, como surge de las constancias de fs. 408 punto “c”, del testimonio de fs. 478, de las fotografías de fs. 519 y 562 del Expte. Nº17.246/09 del Juzgado de Instrucción Formal de 6ª Nominación y -particularmente-, de los croquis de fs. 310 y 510.

Cabe considerar, además, que en oportunidad de resolver el recurso de apelación de fs. 285/289 vta., esta Corte tuvo por acreditado que la porción de relleno pendiente de retirar se encuentra encerrado por el cercado perimetral construido por la empresa Marozzi, y que ello puede constituir un obstáculo al libre escurrimiento de las aguas.

Este Tribunal tiene dicho, reiteradamente, que la expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada del fallo en grado (cfr. Tomo 80:357; 115:397; 136:847; 158:337). Al limitarse la impugnante a manifestar que la sentencia incurre en

error, sin refutar los razonamientos que la sustentan y sin demostrar lógica y fundadamente que la decisión pretendida es la correcta, deviene improcedente el recurso interpuesto.

6º) Que los argumentos del recurso de apelación del representante de la Provincia de Salta revelan sólo una divergencia con lo considerado y resuelto en la sentencia que se impugna, y no alcanzan a demostrar los vicios que se le atribuye, ni el supuesto apartamiento de lo decidido por este Tribunal en el pronunciamiento de fs. 347/368, ni la pretendida afectación del principio de división de poderes.

La Provincia sostiene que el “a quo” debía limitarse a hacer un seguimiento y control de las tareas desarrolladas por las demandadas, lo que no se condice con lo resuelto por esta Corte, puesto que el fallo no expresa -como erróneamente lo interpreta la codemandada-, que el proceso de amparo quedó definitivamente resuelto. Por el contrario, al hacer lugar al recurso de apelación deducido por los actores, este Tribunal consideró prematura la declaración de abstracción que había dispuesto el anterior juez del amparo. Por lo tanto, al ordenar que se actualice la información relativa al objeto perseguido en autos, surgía implícita la continuidad del proceso. Se dispuso entonces su prosecución, bajo las reglas del denominado litigio de derecho público o litigio estructural, en el cual el juez “a quo”, además de las medidas regulatorias específicas que ordenase, debía declarar el derecho y dictar sentencia (v. fs. 360), la que, precisamente, es objeto del presente recurso de apelación.

Constituye un deber ineludible para la provincia y el municipio, defender y resguardar el medio ambiente en procura de mejorar la calidad de vida de los habitantes, así como prevenir la contaminación ambiental y sancionar las conductas contrarias (arts. 30 y 176, incs. 1º, 9º y 15 de la Constitución Provincial); y en relación a ello, cabe considerar -como se adelantó- que las tareas de saneamiento, tanto para reparar el daño ambiental como para evitar la reiteración de futuras inundaciones, se hallan inconclusas, y por ello deben ser llevadas a cabo en atención al objeto del presente amparo y a las consideraciones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias desarrolladas en el fallo de esta Corte de fs. 347/368.

Tampoco se verifica la vulneración del principio de división de poderes que la Provincia atribuye al fallo apelado. En efecto, lo resuelto por el “a quo” se encuentra orientado a los resultados de saneamiento y prevención de futuras inundaciones y contaminaciones, pero no determina los procedimientos a desarrollar, los que serán definidos por los organismos involucrados, pues el planeamiento y ejecución compete a las autoridades de aplicación; razón por la cual el fallo recurrido no ha invadido facultades de otros poderes. Ello es así, sin perjuicio del control y seguimiento jurisdiccional que pudiera corresponder.

7º) Que en razón de lo expuesto, corresponde rechazar los recursos de apelación de las codemandadas, con costas.

8º) Que corresponde ahora analizar el recurso de apelación de los actores, el que está circunscripto a la imposición de costas por el orden causado (fs. 917/920).

Como se señaló anteriormente, el objeto de estabilización y saneamiento de la cuenca del río Arenales se encuentra aún incumplido y ello ha determinado la condena

impuesta por el “a quo” en los puntos I y II del fallo puesto en crisis, resultando así una parte vencedora y otra vencida.

Cabe al respecto recordar que esta Corte tiene dicho que tratándose el amparo de un trámite indiscutiblemente bilateral y contencioso, con una parte actora y otra demandada, procede aplicar, en materia de costas, la regla procesal del art. 67 del C.P.C.C., que las hace soportar al perdedor siguiendo el principio objetivo de la derrota (cfr. esta Corte, Tomo 85:521; 184:987; 216:641, entre otros).

Por lo demás, cabe señalar que para apartarse del mencionado principio y disponer la exención de costas al vencido, deben expresarse fundamentos suficientes que demuestren lo injusto que resultaría su imposición a esa parte, tales como la configuración de una situación compleja o dificultosa, la novedad de la cuestión, la existencia de doctrina y jurisprudencia contradictorias, el cambio de las mismas y la ausencia de previsión legislativa, entre otras (cfr. esta Corte, Tomo 79:1027; 80:117; 208:175); extremos que no se verifican en la especie, pues la falta de la necesaria especificación de las singularidades del caso, de los distintos pronunciamientos a los que refiere y de las supuestas conductas disvaliosas que atribuye a indeterminados vecinos (v. fs. 915 punto IX), no permite tener por cumplida la exigencia de fundar adecuadamente la excepción al principio objetivo de la derrota en materia de costas.

En consecuencia, corresponde acoger el recurso de apelación de los actores, imponiendo a las demandadas las costas de la primera instancia. Con costas.

El Dr. **Abel Cornejo**, dijo:

1º) Que doy por reproducidos los considerandos 1º a 5º del voto de los distinguidos Sres. Jueces preopinantes, no coincidiendo con la decisión plasmada en el considerando 7º respecto de la codemandada Provincia de Salta, como tampoco con la solución a la que arriban en materia de costas en el considerando 8º, en virtud de los fundamentos que paso a exponer.

2º) Que lo primero que debe desentrañarse es si en la presente causa es de aplicación taxativa el principio chiovendano de la derrota, o si existe mérito suficiente para eximir total o parcialmente a la parte vencida de las costas.

3º) Que esta Corte tiene dicho que el art. 87 de la Constitución Provincial nada ha dispuesto en relación a los gastos del proceso, por lo que es de aplicación el noveno apartado de ese precepto, en cuanto expresa que “todas las contingencias no previstas en este artículo son resueltas por el juez del amparo con arreglo a una recta interpretación de esta Constitución”. Tratándose el amparo de un trámite indiscutiblemente bilateral y contencioso, con una parte actora y otra demandada, aquella facultad de los jueces interpretada rectamente, lleva a aplicar en materia de costas, la regla procesal del art. 67 del C.P.C.C. y que las hace soportar al perdedor (Tomo 85:521, entre muchos otros).

Por su parte, el abandono de tal principio y la consiguiente exención de costas, deben justificarse en causas muy fundadas que tornen manifiestamente injusta su imposición, tales como la configuración de una situación compleja o dificultosa, la novedad de la cuestión, la existencia de doctrina y jurisprudencia contradictorias, el cambio de las mismas y la ausencia de previsión legislativa, entre otras (Tomo 79:1027; 80:117; 208:175).

El Dr. Roberto G. Loutayf Ranea enseña –en relación al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- que: “El párrafo 2º del artículo 68 importa una atenuación al principio general de que el vencido debe soportar las costas del juicio, y acuerda a los jueces un adecuado marco de arbitrio, que debe ser ponderado en cada caso en particular y siempre que resulte justificada la exención ... La norma no hace enumeración ni enunciación alguna respecto de los casos en los que procede la exención, lo que implica interpretar que deja el punto librado al prudente arbitrio judicial. De modo que los jueces, en presencia de cada caso, procederán de acuerdo a las circunstancias” (“Condena en costas en el proceso civil”, Astrea, 1998, pág. 77). Es decir que si bien es cierto que el art. 68 establece el principio general de que las costas deben ser impuestas al vencido, no se trata de algo mecánicamente objetivo, porque el mismo precepto manda al juez a eximir de los gastos –total o parcialmente– cuando encuentre mérito para ello. Vale decir que la regla del vencimiento no es absoluta (ob. cit., pág. 76). Sigue diciendo el autor en la obra citada que Fassi y Yañez sostienen que las expresiones “costas por su orden”, “costas por el orden causado” ... tienen un significado similar, y sus efectos son que no se libera al vencido de la totalidad de las costas, sino solo de las correspondientes al vencedor; debe soportar las propias y la mitad de las comunes, o sea las ocasionadas por la actividad conjunta de ambos litigantes o la actividad oficiosa del órgano jurisdiccional” (ob. cit. págs. 75/76) ... El vencimiento, dice (en cita al Dr. Reimundín), debe ser considerado con criterio objetivo y no consultando circunstancias subjetivas de las partes. La conducta procesal del litigante podrá servir de fundamento para la imposición frente a situaciones particulares, pero no es esencialmente computable para determinar la sucumbencia. Por ello, vencimiento y condena son conceptos que pueden ser coincidentes pero no equivalentes, puesto que puede haber vencimiento que no lleve aparejada fatalmente la condena, a la vez que puede haber condena sin vencimiento” (ob. cit. pág. 43).

Ya en el año 1955, en su obra: “II Tratado de los Actos Procesales”, Ramiro Podetti decía que no puede ser único el fundamento de la condena en costas: “Si admitiéramos que es el hecho objetivo de la derrota, prescindiríamos, en muchos casos, de la equidad que omitiría la condena en costas del causante de los actos procesales nulos o inútiles, cuando no es uno de los litigantes. El mismo creador de la doctrina –en alusión a Chiovenda-, así lo admite. De allí que, como he sostenido, existen al menos dos fundamentos de esta institución (en ambos se inspira el art. 221 del Cod. de Proc. Civ.): el vencimiento (fundamento objetivo) y la conducta procesal de litigantes, magistrados y auxiliares (fundamento subjetivo)” ... “En general es la equidad la que determina a los jueces usar de la facultad que les concede la segunda parte del art. 221 (pág. 118) ... recuérdese que la actividad jurisdiccional es esencialmente sustitutiva de la actividad de los sujetos del derecho sustancial insatisfecho y solo puede y debe ser puesta en movimiento, cuando la satisfacción de ese interés no puede ser logrado por la vía normal o primaria. Cuando el caso se dé, aun cuando la sentencia desestimatoria se haga innecesaria o quiera prescindirse de ella por economía, el actor que tuvo el logro de su pretensión, puede ser considerado como vencido, pues el cumplimiento de la obligación no se ha producido como consecuencia de la demanda y ésta falla inicialmente por falta de uno de los requisitos fundamentales. En consecuencia puede ser pasible de condena en costas conforme el art. 221, primer apartado del código de procedimiento civil (pág. 126) ... Pero la actitud del litigante puede excusarse por hechos objetivos, que le indujeron a pensar que tenía razón. En el primer aspecto, el ‘mérito’ surgiría de

confrontar la mala fe, malicia, temeridad, imprudencia o negligencia de un litigante; con la buena fe, prudencia y razonable diligencia de la contraria. En el segundo aspecto el 'mérito' surgirá de la inexistencia de interpretación uniforme de la ley, de la poca claridad y sencillez de los hechos discutidos o de una interpretación contradictoria o recientemente modificada, o de una ley nueva contradictoria o recientemente modificada, o de una ley nueva o de la existencia de hechos dudosos, etc. Difícil es englobar en una fórmula o en unas pocas reglas los fundamentos invocados en las resoluciones de los jueces para eximir de la condena en costas al vencido, no tanto por la diversidad de situaciones que pueden plantearse, cuanto porque es el principio de equidad –no siempre objetivamente fundable– el que determina estos pronunciamientos” (págs. 127/128).

En los antecedentes del caso, se presentan razones que justifican el apartamiento del principio objetivo de la derrota, como reconocimiento de los gastos que se ha visto obligado a afrontar el vencedor (esta Corte, Tomo 65:521; 66:193; 81:307; 113:251, entre otros).

Los puntos 1 a 10 del voto en disidencia de la sentencia del 20 de agosto de 2015 (esta Corte, Tomo 191:459), en los que se realizó un detalle pormenorizado de las acciones de preservación, encauzamiento y saneamiento desarrolladas por la Provincia de Salta, la Municipalidad capitalina y CoSAySa, y la enumeración detallada y actualizada de las acciones iniciadas antes de la interposición del amparo y durante su desarrollo, obrante a fs. 962/964 de autos, dan suficiente cuenta que el caso encuadra en el supuesto de párrafo precedente.

En efecto, los actores no tuvieron que recurrir al Poder Judicial “necesaria e ineludiblemente” para hacer valer sus derechos frente a la Provincia de Salta, la Municipalidad de la Ciudad de Salta y a CoSAySa.

No debe soslayarse el hecho de que el juez del amparo, en su sentencia de fs. 898/915 y vta. no impuso obligación alguna a las codemandadas Provincia de Salta, Municipalidad de Salta y CoSAySa a consecuencia de incumplimientos; tampoco impuso modificaciones a los planes de acción que cada una de las demandadas venía desarrollando, sino por el contrario, ordenó la confección y presentación de un Plan de Manejo del río Arenales y un Plan de Monitoreo de Plazos. Esto es, encauzó las acciones que ya se venían desarrollando.

Corresponde destacar que con la ayuda de la Audiencia Pública citada por el juez de la causa, se logró encauzar la pretensión de los actores que unánimemente fue calificada -al menos- de confusa.

Siguiendo nuevamente al autor citado, debe ponderarse la conducta de los actores, respecto de quien es el juez del amparo ya tiene dicho que tuvieron comportamientos disvaliosos con claro efecto contaminante al río, con sustento en la prueba incorporada y reservada en sobre “H”.

4º) Que finalmente, cabe también la calificación del párrafo precedente a la conducta desplegada por la empresa codemandada Néstor A. Marozzi S.A., a quien el juez “a quo” debió condenar a retirar los metros necesarios de avance de su propiedad, para que los límites del inmueble coincidan con los estribos del puente sobre Avenida

Tavella y eventualmente a retirar la franja de terreno correspondiente luego de fijada la línea de ribera, en un plazo no mayor a 60 días.

Respecto de su memorial de agravios, como ya lo ha señalado este Tribunal, corresponde rechazar el recurso de apelación cuyos agravios omiten atacar concretamente los verdaderos fundamentos del fallo, limitándose a efectuar formulaciones genéricas que sólo traducen una discrepancia con la interpretación y aplicación de las normas legales que rigen el caso (Tomo 58:1157); o aquellos que no contienen nuevos argumentos o razones valederas que justifiquen adoptar una solución distinta (Tomo 64:117).

Por lo demás, cabe recordar que no basta la mera invocación de una situación de gravedad institucional, sino que tal argumento debe ser objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (CSJN, Fallos, 303:221, 759; 305:1920), extremos que no se verifican cuando la intervención de la Corte no tiene otro alcance que el de remediar, eventualmente, intereses del apelante (cfr. CSJN, Fallos, 304:1243). Por lo que corresponde su rechazo con costas (art. 67 del C.P.C.C.).

5º) Que pasando al mérito de la apelación interpuesta por la Provincia a fs. 936/938 vta., viene al caso destacar la congruencia de sus argumentos con algunos considerandos del voto en disidencia de la sentencia de fecha 20 de agosto de 2014, entre los que se dijo que al Poder Judicial no le compete evaluar las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los demás órganos del poder para adoptar decisiones que le son propias. Su potestad de revisar los actos administrativos sólo comprende, como principio, el control de su legitimidad -que no excluye la ponderación del prudente y razonable ejercicio de las facultades de las que se hallan investidos los funcionarios competentes- (cfr. CSJN, Fallos, 308:2246; 311:2128, entre otros), pues no puede salir de su esfera para entrar a revisar las facultades privativas de los otros poderes del estado sin desnaturalizar su función específica y violar un principio básico del sistema republicano de gobierno: la división de poderes.

Por su parte, la Corte Federal ha dicho que los jueces no pueden evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de las que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución (Fallos, 328:1146), y que la misión más delicada de los jueces es saber mantenerse dentro de su órbita, sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes del estado, de modo de preservar el prestigio y la eficacia del control judicial, evitando así enfrentamientos estériles con los restantes poderes del estado (Fallos, 311:2580; 322:528).

Ello así, se debe acoger dicha apelación, con costas (art. 67 del C.P.C.C.).

6º) Que en definitiva, corresponde hacer lugar parcialmente la apelación de fs. 917/920 (actora) y distribuir las costas por el orden causado respecto de la Provincia de Salta, la Municipalidad de la Ciudad de Salta y CoSAySa; en tanto acogerla respecto del codemandado Néstor A. Marozzi S.A., condenándolo en costas en una proporción del 25 %. Rechazar el recurso de apelación de fs. 926 interpuesto por Néstor A. Marozzi S.A. Acoger la apelación presentada por la Provincia de Salta a fs. 936/938. Con costas en proporción a la derrota (art. 67 del C.P.C.C.).

Por lo que resulta de la votación que antecede,

LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. **RECHAZAR** los recursos de apelación interpuestos a fs. 923/925 y 926. Con costas.

II. **HACER LUGAR** al recurso de apelación deducido por los actores a fs. 917/920 y, en su mérito, imponer las costas en ambas instancias a las codemandadas.

III. MANDAR que se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Dra. Sandra Bonari, Dres. Guillermo A. Catalano -Presidente-, Abel Cornejo. Dra. Teresa Ovejero Cornejo, Dr. Guillermo Alberto Posadas –Jueces y Juezas de Corte-. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf -Secretaria de Corte de Actuación-).

DOCTRINA: Las características de la cuenca del río Arenales -que arrastra sedimentos con las crecientes-, la constante acción antrópica sobre ella, y la carencia de efectividad de las actividades llevadas a cabo por los organismos públicos sobre el río y sobre las descargas que recibe, hacen necesario una permanente intervención correctiva y preventiva de las autoridades competentes para rectificar los desvíos del cauce, controlando y contrarrestando los vuelcos de desechos contaminantes al río.

La expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada del fallo en grado. Al limitarse la impugnante a manifestar que la sentencia incurre en error, sin refutar los razonamientos que la sustentan y sin demostrar lógica y fundadamente que la decisión pretendida es la correcta, deviene improcedente el recurso interpuesto.

Constituye un deber ineludible para la provincia y el municipio, defender y resguardar el medio ambiente en procura de mejorar la calidad de vida de los habitantes, así como prevenir la contaminación ambiental y sancionar las conductas contrarias (arts. 30 y 176, incs. 1º, 9º y 15 de la Constitución Provincial); y en relación a ello, cabe considerar que las tareas de saneamiento, tanto para reparar el daño ambiental como para evitar la reiteración de futuras inundaciones, se hallan inconclusas, y por ello deben ser llevadas a cabo en atención al objeto del presente amparo y a las consideraciones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias desarrolladas en el fallo de esta Corte.

No se verifica la vulneración del principio de división de poderes que la Provincia atribuye al fallo apelado y a que, lo resuelto por el “a quo” se encuentra orientado a los resultados de saneamiento y prevención de futuras inundaciones y contaminaciones, pero no determina los procedimientos a desarrollar, los que serán definidos por los organismos involucrados, pues el planeamiento y ejecución compete a las autoridades

de aplicación; razón por la cual el fallo recurrido no ha invadido facultades de otros poderes. Ello es así, sin perjuicio del control y seguimiento jurisdiccional que pudiera corresponder.

Tratándose el amparo de un trámite indiscutiblemente bilateral y contencioso, con una parte actora y otra demandada, procede aplicar, en materia de costas, la regla procesal del art. 67 del C.P.C.C., que las hace soportar al perdedor siguiendo el principio objetivo de la derrota.

Para apartarse del mencionado principio y disponer la exención de costas al vencido, deben expresarse fundamentos suficientes que demuestren lo injusto que resultaría su imposición a esa parte, tales como la configuración de una situación compleja o dificultosa, la novedad de la cuestión, la existencia de doctrina y jurisprudencia contradictorias, el cambio de las mismas y la ausencia de previsión legislativa, entre otras; extremos que no se verifican en la especie, pues la falta de la necesaria especificación de las singularidades del caso, de los distintos pronunciamientos a los que refiere y de las supuestas conductas disvaliosas que atribuye a indeterminados vecinos, no permite tener por cumplida la exigencia de fundar adecuadamente la excepción al principio objetivo de la derrota en materia de costas. (Del voto de los Dres. Samsón, Vittar, Dra. Bonari, Dr. Catalano, Dra. Ovejero Cornejo; Dr. Posadas)

El abandono del principio objetivo de la derrota y la consiguiente exención de costas, deben justificarse en causas muy fundadas que tornen manifiestamente injusta su imposición, tales como la configuración de una situación compleja o dificultosa, la novedad de la cuestión, la existencia de doctrina y jurisprudencia contradictorias, el cambio de las mismas y la ausencia de previsión legislativa, entre otras.

En los antecedentes del caso, se presentan razones que justifican el apartamiento del principio objetivo de la derrota, como reconocimiento de los gastos que se ha visto obligado a afrontar el vencedor por cuanto los actores no tuvieron que recurrir al Poder Judicial “necesaria e ineludiblemente” para hacer valer sus derechos frente a la Provincia de Salta, la Municipalidad de la Ciudad de Salta y a CoSAySa.

El juez del amparo, en su sentencia no impuso obligación alguna a las codemandadas Provincia de Salta, Municipalidad de Salta y CoSAySa a consecuencia de incumplimientos; tampoco impuso modificaciones a los planes de acción que cada una de las demandadas venía desarrollando, sino por el contrario, ordenó la confección y presentación de un Plan de Manejo del río Arenales y un Plan de Monitoreo de Plazos. Esto es, encauzó las acciones que ya se venían desarrollando.

Corresponde rechazar el recurso de apelación cuyos agravios omiten atacar concretamente los verdaderos fundamentos del fallo, limitándose a efectuar formulaciones genéricas que sólo traducen una discrepancia con la interpretación y aplicación de las normas legales que rigen el caso; o aquellos que no contienen nuevos argumentos o razones valederas que justifiquen adoptar una solución distinta.

Al Poder Judicial no le compete evaluar las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los demás órganos del poder para adoptar decisiones que le son propias. Su potestad de revisar los actos administrativos sólo

comprende, como principio, el control de su legitimidad -que no excluye la ponderación del prudente y razonable ejercicio de las facultades de las que se hallan investidos los funcionarios competentes-, pues no puede salir de su esfera para entrar a revisar las facultades privativas de los otros poderes del estado sin desnaturalizar su función específica y violar un principio básico del sistema republicano de gobierno: la división de poderes.

Los jueces no pueden evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de las que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución, y que la misión más delicada de los jueces es saber mantenerse dentro de su órbita, sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes del estado, de modo de preservar el prestigio y la eficacia del control judicial, evitando así enfrentamientos estériles con los restantes poderes del estado. (Del voto del Dr. Cornejo)

TRIBUNAL: Dres. Samsón, Vittar, Dra. Bonari, Dres. Catalano, Cornejo, Dra. Ovejero Cornejo, Posadas

DOCTRINA: Dra. von Fischer